Globethics Repository



Ecuador

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Acosta,Alberto
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-13 01:21:25
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218629

portes

Ecuador: ecos de la rebelión de los forajidos

Alberto Acosta

La abrupta salida del coronel Lucio Gutiérrez de la presidencia de Ecuador fue producto de un concurso de circunstancias. Los abusos de poder en que incurrió el ex-presidente ecuatoriano tuvieron repercusiones graves en la economía y en la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana que, estimulada por un medio de comunicación social, Radio La Luna, creó un movimiento civil que aceleró la defenestración de Gutiérrez, ex-edecán de otro presidente derrocado: el muy controversial Abdalá Bucaram.

Con ese enfoque neoliberal, es moral lo que acreciente las ganancias, aunque contradiga las condiciones básicas de toda vida civilizada en sociedad; también es aceptable cualquier política que incremente las utilidades, sin importar si se destruyen instituciones y se disgrega a la comunidad nacional.
Mientras la moral y la política continúen sometidas a la economía, nada podrá hacerse. Por eso, la primera batalla es la que debe librarse para que la moral imponga límites a la política, y ambas a la economía
Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno: «Para entender la política. Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo», 1999.

¿Cómo es posible, se preguntará más de una persona, que el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez Borbua haya fracasado tan estrepitosamente? Al menos el contexto económico en este pequeño país andino parecía en orden.

Alberto Acosta: economista ecuatoriano; profesor universitario y editorialista de prensa. Actualmente se desempeña como consultor del Ildis-FES en Ecuador y asesor tanto de organismos nacionales e internacionales como de diversos movimientos sociales.
Palabras clave: corrupción, economía, gobernabilidad, sociedad civil, Lucio Gutiérrez, Ecuador.

A la economía se la veía estabilizada. El entorno internacional, en el campo económico, era irrepetible. La calificación de riesgo-país había mejorado. El régimen contaba con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito y asomaba, por cierto, como uno de los gobiernos preferidos del presidente George Bush II después de que el coronel, cuando apenas iniciaba su gestión en 2003, se declarara públicamente «el mejor aliado de los EEUU».

El derrocamiento de Gutiérrez, desde esta lectura, no tendría motivación económica[1]. Su gobierno correspondía tan bien a la macroeconomía, que el coronel, con el eco entusiasta de los economistas autodefinidos como «ortodoxos, conservadores y prudentes», desplegó una multimillonaria campaña mediática para resaltar los logros alcanzados en este campo. Con cansina insistencia recordaba que en los dos últimos años de su gobierno, luego del ajuste fiscal que dio inicio a su gestión, no hubo «paquetazo»[2], y clamaba a los cuatro vientos que él había conseguido reducir la inflación a niveles internacionales, al tiempo que anunciaba que pronto llevaría de nuevo al Ecuador al mercado financiero internacional, de donde quedó marginado luego de la moratoria de 1999[3].

La repulsa contra el coronel debe haberse gestado exclusivamente por los reiterados atropellos a la institucionalidad política y constitucional. Al menos en el nivel de los grandes medios de comunicación, muchos reclamos y protestas giraban en torno de estos temas. Lo que realmente vivía y sentía la población al parecer no les interesaba.

Los detonantes recientes de la rebelión

En la tarde del miércoles 13 de abril de 2005 había terminado una nueva jornada de manifestaciones contrarias al régimen. Los manifestantes, que no fueron muchos, regresaban cansados, golpeados y desanimados. No habían logrado reeditar la gran marcha del anterior 16 de febrero, en la que más de

1. Recuérdese que los dos anteriores presidentes defenestrados enfrentaron problemas económicos que contribuyeron a minar su base de respaldo popular: Abdalá Bucaram, derrocado en 1997, y particularmente Jamil Mahuad, caído en 2000, corresponsable de una de las mayores crisis que ha vivido Ecuador.
2. Entiéndase como tal el incremento de los precios y las tarifas de los bienes y servicios públicos con el que los gobiernos procuran recaudar recursos fiscales para atender las demandas externas y, por cierto, restablecer los valores deteriorados por la inflación.
3. En el año 2000, el gobierno de Gustavo Noboa, de una manera atropellada, superó la moratoria por medio del canje de Bonos Brady por Bonos Global en una negociación a todas luces negativa para el interés nacional.

200.000 personas salieron a las calles del centro colonial de Quito para exigir la renuncia del coronel. Los líderes de dicha marcha, que no estuvieron a la altura de los y las marchistas, se contentaban con pedir cambios en la Corte Suprema, cuya composición se forjó el 8 de diciembre de 2004, al margen de la Constitución, por iniciativa directa del coronel Gutiérrez, presidente de la República desde inicios de 2003.

Dicha Corte Suprema de facto, protegida por un grupo de matones en las calles y por el coronel desde la Presidencia, consagró la impunidad de varios personajes. Su presidente, apoyado por jueces también ilegítimos, empezó a cumplir con los compromisos adquiridos. Anuló los procesos judiciales seguidos a tres pillos de alto calibre político, prófugos de la justicia: Alberto Dahik, Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa. ¿Qué importaba que el entonces vicepresidente Dahik –en 1995 también primer presidente de Transparencia Internacional– no haya podido explicar el uso de gastos reservados por valor de 4 millones de dólares? La Corte Suprema tampoco tomó en cuenta el atraco de las mochilas escolares, equivalente a más de 30 millones de dólares, ni los 3,5 millones de dólares de gastos reservados que sacó el presidente Bucaram en 11 costales al huir del Palacio Presidencial en 1997, escoltado por su edecán. Nada interesó a los jueces de facto que el presidente Noboa haya dirigido, inclusive infringiendo la ley, una negociación de la deuda externa inconveniente para el país, pensada y ejecutada para –textualmente– «maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos (global)». El retorno casi triunfal de estos personajes a poco de anulados sus juicios –retorno que fuera prácticamente transmitido por cadena a través de los principales canales de televisión nacionales– parecía formar parte de una esquizofrenia colectiva.

El coronel fue el gran gestor de estos acontecimientos, que para nada preocuparon a la Organización de Estados Americanos (OEA). Él, siendo presidente, visitó en Panamá, en septiembre de 2004, al prófugo Bucaram, de quien fuera su edecán. Y, cumpliendo con lo pactado, fraguó –con la complicidad de varios grupúsculos políticos, incluso algunos que se consideran de izquierda– una mayoría parlamentaria que aseguró a Bucaram el control del Congreso Nacional así como de la Corte Suprema de Justicia. Apoyó este contubernio Álvaro Noboa Pontón, aquel millonario encaprichado desde hace rato en comprarse la Presidencia de la República, a quien, como resultado del pacto, le tocó el Tribunal Supremo Electoral, así como espacios clave en la Corte Suprema de facto. En este sainete cabría incluir también a todos aquellos líderes opositores, timoratos y tuertos, que se angustiaban casi solo

por lo que sucedía en las cortes, pero que no comprendían otros temas que preocupaban a la sociedad.

A pesar del retorno de estos prófugos, que habría impactado la conciencia de amplios sectores de la población, las protestas matutinas y vespertinas en aquel miércoles no prosperaron como se esperaba. La represión policial fue violenta: dejó casi 100 heridos y cubrió de gases lacrimógenos la capital de Ecuador. Sin embargo, ese mismo día, cuando los manifestantes se protegían en sus casas, luego de que el gobierno se presentara públicamente como el triunfador de la jornada, empezó a circular una invitación. Desde Radio La Luna –un proyecto periodístico sin fines de lucro–, la ciudadanía se negó a aceptar la derrota y se propuso realizar un cacerolazo nocturno. La idea cobró fuerza. Y esa noche unas 5.000 personas se dieron cita en la avenida de los Shirys, desde donde marcharon a protestar frente al cercano edificio de la Corte Suprema de Justicia. La prepotencia gubernamental volvió a aflorar. Los pacíficos manifestantes fueron reprimidos. Esto exasperó los ánimos. Un grupo de ellos se dirigió a la casa del coronel –ubicada en un exclusivo barrio capitalino–, para exigirle que abandonara el cargo, reclamo formulado desde meses atrás, a través de multitudinarias manifestaciones, en Guayaquil, Quito y Cuenca.

El coronel, pronta y tontamente, al día siguiente, amenazó con que demandaría a quienes llegaron a protestar frente a su casa, tras asegurar que habían sido unos «forajidos que fueron a atacarme a mi domicilio»[4].

Cual círculo concéntrico provocado por una piedra que cae en aguas represadas, se expandió la protesta, a través de los medios más diversos. La creatividad e incluso el humor coparon la ciudad. Desde ese día se generaron cada vez más marchas en Quito, autoconvocadas por quiteños y quiteñas –niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, ancianas–, quienes desde el día jueves 14 asumieron espontáneamente su condición: «todos somos forajidos», repetían con insistencia. Las manifestaciones fueron sobre todo durante la noche en muchos barrios y en los valles aledaños, así como en algunas ciudades de la sierra. Se organizaron cacerolazos, el «reventón» (reventar globos), el «tablazo» (golpear tablitas), el «rollazo» (salir con papel higiénico para limpiar tanta mierda), el «golpe de estadio» (protestas masivas en los estadios de fútbol), el «basurazo», el «escobazo», el «mochilazo»...

4. Él, hay que recordarlo, no vivía en esa casa casi desde que asumió la Presidencia: allí quedaron su esposa e hijas. Él dormía en el Palacio, rodeado de miles de guardias, policías, soldados y perros de todo tipo, incluso algunos encorbatados.

Radio La Luna, encabezada por el periodista Paco Velasco, asumió el reto. Él, quien insistía una y otra vez en su condición de periodista y se negaba a liderar la rebelión, se convirtió en un símbolo. La convocatoria, en realidad, la hizo la propia ciudadanía, de la que surgieron las ideas para la acción. La gente llamaba a la radio o hacía largas colas en La Luna para convocar a la rebelión luego de dar su nombre, el número de su cédula de identidad y de reconocer públicamente su calidad de «forajidos» para contradecir las declaraciones del coronel, que decía que esta propuesta era minúscula y que estaba organizada por algunos políticos tradicionales.

En realidad, a los políticos tradicionales de todas las tendencias les fue vedado por la propia gente el ingreso a la radio y no fueron aceptados en las marchas y movilizaciones.

Las tribulaciones del coronel

Ante las crecientes e inesperadas protestas, el coronel se asustó. Las marchas espontáneas hicieron temblar al inquilino del Palacio de Carondelet, sede del gobierno, en medio del Quito colonial. En breve se redoblaron las medidas de seguridad. En otro acto torpe, con la soberbia acostumbrada, fue decretado el viernes en la noche el Estado de Sitio para la capital. Ya era tarde. La rebelión estaba en marcha. Ni el fin de semana la enfrió. La ciudadanía se volcó a las calles a desobedecer la medida oficial, complementada con un nuevo acto inconstitucional, pues, el coronel, en su desesperación, asumiendo en la práctica más poderes dictatoriales, resolvió disolver la misma Corte que él ayudó a conformar.

La protesta masiva y pacífica de la ciudadanía frustró la intentona del coronel. El Estado de Sitio y la disolución de dicha Corte duraron menos de 12 horas. El Ejército se negó a reprimir al pueblo. Organizaciones de Derechos Humanos, la mañana del sábado, lograron interponer un amparo. Pero, sobre todo, la gente de Quito, sintiendo que le habían declarado la guerra, procedió a la desobediencia civil, inundando las calles y plazas con manifestaciones cada vez más numerosas. El coronel reculó públicamente.

La policía y los garroteros del régimen desplegaron su brutalidad en contra de miles de manifestantes que espontáneamente empezaron a rodear el Palacio Presidencial la noche del sábado 16 y la madrugada del domingo 17. Sin dejar de protestar durante el lunes, el martes 19, desde las cinco de la tarde, se convocó una nueva concentración en la Cruz del Papa, una

explanada enorme. La luna brillaba en el horizonte. La marcha aglutinó a por lo menos 150.000 personas, quienes luego de cantar el himno nacional, decidieron marchar al Palacio, en donde también confluían otras marchas desde diversos barrios de la capital. A pesar del masivo cerco policial, la gente comenzó a infiltrarse en el centro de la ciudad. La represión fue brutal. Julio García, periodista chileno radicado en Ecuador desde inicios de la dictadura de Augusto Pinochet, en la que perdió tres dedos de su mano debido a la represión, cayó asesinado por la lluvia de gases policiales. Los heridos se contaron por cientos. El coronel empezó sus últimas horas en Palacio.

Radio La Luna amaneció en Quito, el miércoles 20 de abril, con un ánimo de indignación. Los áulicos del coronel, en cientos de buses, movilizaron, desde varias provincias, a sus huestes para defender la democracia... Intentaban reeditar la operación de intimidación de casi toda la gestión del coronel, teniendo como eje al Ministerio de Bienestar Social. Esta cartera de Estado fue la caja chica para contratar matones o simples desocupados, que por 5 o 10 dólares al día eran movilizados para aplaudir a su presidente.

El anuncio de la cercanía de los buses gutierristas provocó la inmediata respuesta forajida. Muchas de las jóvenes y los jóvenes colegiales, autoconvocados al «mochilazo», marcharon hacia el Palacio, mientras que otros, apoyados por la ciudadanía y por las autoridades de la ciudad, cerraron las vías de acceso a Quito. Con palos y piedras se enfrentaron con los asalariados, a quienes la fuerza pública obstaculizaba el paso a punta de metralla disparada al aire y de bombas lacrimógenas para romper la resistencia popular. En algunos lugares la batalla fue campal. Una mujer fue atropellada por el propio vehículo que le traía a la capital. El Ministerio de Bienestar Social, desde donde disparaban los matones del gobierno, fue asaltado por la ciudadanía e incendiado, quizás por la mano de quienes querían ocultar las huellas de todas las fechorías cometidas. El Palacio empezó a ser sitiado por una multitud indignada, que desbordaba el cerco policial.

El coronel recibió la última visita de su principal mentora, la embajadora de Washington en Quito, así como de su primer ministro de Economía. A poco de concluida esta visita, renunció el comandante de la Policía. A mediodía se confirmaba la noticia: las Fuerzas Armadas no respaldaban más al coronel. En la mañana, el Congreso Nacional, que había asumido poderes dictatoriales y reunido en un sitio distinto del habitual –porque el presidente del Parlamento, hombre de confianza de Bucaram, se negaba a adoptar una salida a la crisis–, resolvió destituir a Gutiérrez por abandono de cargo.

A la hora de la siesta se escapó el coronel. Él, que había ofrecido una y otra vez que «cambiaba el Ecuador o moría en el intento», se fugó. Sin siquiera intentarlo, corrió. Corrió por una terraza del Palacio Presidencial en un helicóptero cuando la multitud empezó a inundar la Plaza Grande. En el aeropuerto nuevamente tuvo que correr entre el helicóptero y la avioneta, para volver a la carrera al helicóptero, y salvarse de las masas «forajidas» que invadieron las pistas para impedir la salida de la avioneta con la que quería salir del país. Y, un par de días más tarde, volvió a correr, de madrugada, disfrazado de vulgar policía, desde la Embajada del Brasil a un aeropuerto cercano de la capital para de allí volar al exilio.

Lo económico, otro factor en «la rebelión de los forajidos»

Varios voceros vinculados con los círculos del poder repetían que, a lo largo de la gestión del coronel, por fin la economía dolarizada había encontrado un rumbo saludable, en especial porque la inflación llegó al 2,7% de promedio anual en 2004. Confundían estabilidad macroeconómica con reducción de la inflación. Al afirmar que uno de los grandes logros había sido disminuir la inflación hasta llevarla a niveles internacionales, desconocían, en primer lugar, que esta disminución, conseguida luego de un largo y doloroso proceso desinflacionario, se obtuvo sacrificando las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Pero lo que es más preocupante es que no dicen (o no saben) que una verdadera estabilidad significa máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo, lo que posibilita tener una economía capaz de enfrentar los choques externos sin mayores sobresaltos.

Si se aceptan los criterios estabilizadores de los «ortodoxos, conservadores y prudentes», Argentina, que incluso registró un índice de precios negativo, estuvo bastante «estable» antes de la peor crisis de su historia, en 2001. Bolivia, con índices inflacionarios bajísimos, tampoco ha conseguido una verdadera estabilidad y las consecuencias sociales y políticas de ese manejo económico están a la vista. El abatimiento de la inflación en Ecuador es fruto de la dolarización impuesta en enero de 2000, la cual ha provocado enormes costos sociales y claras tendencias recesivas en el sector no petrolero de la economía. La reducción de la inflación se ha logrado luego de alcanzar uno de los niveles de precios más altos de América Latina, con las consiguientes repercusiones del incremento de los problemas sociales y de la pérdida de la competitividad. En relación con el crecimiento económico, tampoco todo lo que brilla es oro. América Latina creció a un nivel del 5,5% en 2004 gracias a las buenas condiciones externas, básicamente a la recuperación

económica de varios países desarrollados en un contexto de bajas tasas de interés. Considerando el petróleo, Ecuador –con un crecimiento del 6,7%– se ubicó en el cuarto puesto de crecimiento regional, después de Venezuela, Uruguay y Argentina. Sin embargo, sin el crecimiento petrolero, fruto del funcionamiento de la actividad coyuntural de las empresas petroleras privadas, y cuyo beneficio es muy marginal para la población, Ecuador –con un crecimiento de 3%– fue en realidad de los cuatro países el que menos creció, superando solamente a Haití, República Dominicana y El Salvador (paradójicamente otro país dolarizado).

Este magro crecimiento de la economía no petrolera se refleja en forma preocupante en diversos sectores del aparato productivo. Véase, por ejemplo, la recesión en el agro. Esto demuestra, en realidad, el fracaso del manejo económico, sobre todo teniendo un entorno internacional irrepetible: altos precios del petróleo, récord en remesas de emigrantes, bajísimas tasas de interés internacionales, elevado crecimiento de la economía de Estados Unidos (incluso depreciación del dólar), sin mencionar el flujo de narcodólares.

Justamente gracias a los altos precios del petróleo, durante 2004, después de tres años de déficit comercial consecutivo, se registró un superávit algo superior a los 250 millones de dólares. Esto dio lugar a expresiones de júbilo en el régimen de Gutiérrez y en los círculos ortodoxos. Nuevamente la realidad contradijo a la propaganda. Sin negar la existencia de dicho superávit, éste fue menor a los excedentes comerciales usualmente obtenidos por el país hasta antes de la dolarización, incluso con muchos menores precios del petróleo. Y en 2004, si se quita el hidrocarburo, el déficit de la balanza comercial no petrolera supera los 3.200 millones de dólares, cifra descomunal, la mayor de todo el periodo dolarizado, cinco veces superior a los promedios de los años 90. Esto constituye un descalabro externo que no podría ser sostenido sin las remesas de emigrantes y los altos precios petroleros.

Las tasas de interés no se han reducido, como afirman quienes quieren vender la idea de una economía estabilizada y exitosa. En realidad, las tasas de interés reales, esto es, las tasas de interés nominales menos la inflación, así como el margen real entre las tasas activas y pasivas, se han incrementado. Esta es una de las causas directas del quiebre de amplios segmentos del sector productivo (cuyo comportamiento sí obedece a las tasas de interés reales) y de la explosión del crédito de consumo (cuyo comportamiento se debe en gran medida a las tasas de interés nominales). Esta evolución ha

provocado, por cierto, el incremento de las utilidades de la banca, que tanto apoyó al coronel.

En este conjunto de logros inexistentes se ha resaltado la estabilidad de las cuentas fiscales. Quienes pretenden defender el rumbo de la economía no mencionan que en el año 2004 el pueblo ecuatoriano fue obligado a realizar un ahorro forzoso para tener un superávit fiscal primario (que calcula ingresos y egresos fiscales, sin el servicio de la deuda) de más del 2% del PIB, o sea más de 700 millones de dólares, recursos que faltan para la inversión pública así como para la atención de las enormes y tan postergadas demandas sociales. En realidad, el país sobrevive no gracias a la política económica ortodoxa, sino a pesar de ésta y de la dolarización. Lo que siente la población –falta de trabajo, carestía de la vida, etc.–, es lo que realmente muestra la economía cuando se utilizan los indicadores económicos de una manera competente y honesta, y no simplemente para hacer propaganda barata como la que hizo el coronel.

Las travesuras económicas del coronel Gutiérrez y de su equipo ortodoxo

Después de un ajuste fiscal a inicios del año 2003, es cierto que el gobierno de Gutiérrez no alteró los precios y las tarifas de los bienes y servicios públicos. Esto fue posible gracias a los ingresos petroleros y, particularmente, a que ya no se puede subir más dichos precios, que son difíciles de elevar cuando la dolarización ha exacerbado los costos de producción.

Pero eso no fue todo. El coronel desplegó un manejo fiscal considerado como austero cuyo saldo sintetiza un descomunal «paquetazo». Gutiérrez, quien firmó una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional apenas inició su gestión y acordó, días después, un programa de reformas estructurales con el Banco Mundial, recortó drásticamente la inversión social efectiva. Por ejemplo, en educación, pasó de 638 millones de dólares en 2003 a 464 millones de dólares en 2004 (esto explica por qué la mitad de las escuelas en la costa ecuatoriana no estaban aptas para iniciar el año lectivo 2005 y por qué cientos de miles de niños no acceden a las aulas); en salud, la inversión cayó de 323 a 211 millones de dólares (esto explicaría, por ejemplo, el paro médico, que cumplió dos meses el día en que el coronel se fugó de la Presidencia, quien no estaba dispuesto a transferir los 15 millones de dólares que adeudaba a los galenos para no afectar las cuentas fiscales); y en desarrollo agropecuario el bajón fue de 151 millones a 71 millones de dólares (por eso también el agro se hunde en franca recesión). El monto

transferido para inversiones sociales apenas sumó 746 millones de dólares, menos de la mitad de las remesas de los y las emigrantes, que alcanzaron 1.604 millones de dólares en 2004.

Como contrapartida de tanta austeridad, la generosidad, la puntualidad y la eficiencia del coronel fueron la norma en el servicio de la deuda pública, particularmente de la externa. Este servicio registró un incremento del 60%, al pasar de 2.370 millones de dólares en 2003 a 3.795 millones en 2004, para lo que incluso se echó mano del ahorro correspondiente a las pensiones jubilares. Este manejo económico restrictivo explica el incremento del desempleo abierto durante el gobierno del coronel, al pasar de 7,7% en 2002 a casi 12%, cruda realidad que permite comprender la facilidad que tenía su régimen para movilizar grupos humanos desempleados, contratados para aplaudir al coronel, autodefinido como «dictócrata», o para atacar a sus contrarios.

Esta política económica –permanentemente monitoreada por el FMI, aun terminado el plazo de vigencia de la Carta de Intención de 2003– logró incrementar sustantivamente la cotización de los Bonos Global. Antes de la creación del Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), establecido en 2002, se cotizaban en menos del 50% los Bonos Global a 12 años, emitidos por 1.250 millones de dólares, y en menos del 40% los Bonos Global a 30 años, por 2.700 millones. Con el solo anuncio del nombramiento como ministro de Economía de Mauricio Pozo –avalado por el FMI y Wall Street–, quien se transformaría en «economista de cabecera del dictócrata» (Raúl Vallejo *dixit*), los bonos comenzaron a subir. Al inicio de su gestión, en enero de 2003, los bonos a 12 años ya se cotizaban a 67% y los bonos a 30 años, en 48%. Solo ese año, con el auge de la política ortodoxa, estos papeles alcanzaron valores inimaginables: los primeros llegaron al 101% y los segundos al 85%, y siguieron subiendo. En realidad, se recompró exclusivamente la deuda pública interna para financiar el presupuesto y así atender, de carambola, a los acreedores externos. Aún más: la sola existencia del Feirep maximizó el precio de los Bonos Global, pues para eso fue expresamente creado dicho fondo. Y esa sola revalorización, que podría haber cobijado actos de colusión y uso indebido de información privilegiada, otorgó ganancias potenciales a los tenedores de bonos –muchos de ellos ecuatorianos, entre los que están la banca privada– por 1.400 millones de dólares.

Es evidente: el coronel buscó satisfacer las exigencias de los acreedores y, de paso, mejorar la imagen del país en el mercado financiero mundial para

poder continuar contratando créditos externos. Para consolidar estos «logros», el coronel y su equipo económico, utilizando simples decretos ejecutivos, no dudaron en alterar el espíritu de la ley para limitar el gasto y para reducir artificialmente el ingreso petrolero del presupuesto desviando los excedentes del precio del petróleo hacia fondos de estabilización. Así, por ejemplo, el coronel presupuestó los ingresos petroleros del fisco fijando un precio estimado del barril de crudo a un valor muy por debajo de una expectativa objetiva. En 2003 y 2004, este precio se fijó en 18 dólares por barril, cuando el barril de crudo Oriente se cotizó sobre 30 dólares en promedio. En 2005 el precio se congeló en 25 dólares mientras el precio de venta supera los 40 dólares por barril. Esta diferencia se desvía del presupuesto y pasa a financiar el Fondo de Estabilización Petrolera (creado en 1999), y de éste, 45% va a un segundo fondo, el Feirep. Consecuentemente, en 2004 el Feirep cerró con un excedente de 55%. En efecto, en lugar de los 292 millones de dólares presupuestados, se recaudaron 638 millones (alrededor del 2% del PIB).

Existen dos razones que explican este importante incremento. La primera, ya mencionada, la fijación de un precio estimado por debajo en medio de un mercado con elevados precios del petróleo. La segunda se origina en las siguientes «travesuras»: la ley estipula que el Feirep se financie con ingresos que le corresponden al Estado, provenientes del petróleo de las compañías privadas que sea transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Sin embargo, vía decreto, en contra de la ley, el coronel autorizó que el Feirep se alimentara del crudo pesado que le corresponde al Estado sin importar por cuáles oleoductos se transporte, sea el OCP o el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Por si esto fuera poco, el 24 de diciembre de 2003, el coronel, siempre con su ministro Pozo, promulgó un decreto redefiniendo la calidad del crudo pesado, de 18 grados API a 23 grados API. Esto amplió el volumen del crudo pesado.

El saldo de este manejo fiscal resultó perverso: mientras por un lado se registraba un superávit en el Feirep, por otro había un déficit en el Presupuesto General del Estado que debía ser saldado con un nuevo endeudamiento externo. Como para completar el cuadro, los recursos del Feirep debían depositarse, por ley, en un fideicomiso administrado por el Banco Central. Los recursos fueron a parar a varias entidades financieras internacionales obteniendo una magra rentabilidad del 1,5% al 2%. En algunos casos, como sucedió con la Corporación Andina de Fomento, en donde se depositó parte de los ahorros del fideicomiso, se contrataba al mismo tiempo créditos con tasas de interés superiores al 7%. Incluso una porción de estos recursos fue

depositada en el Barclays Capital Inc., entidad que financia la estadía del coronel en EEUU, desde donde amenaza con la reconquista del poder luego de abandonar su exilio en Río de Janeiro[5].

Eso no fue todo. Aquel 20% establecido en la ley para situaciones de emergencia, tan defendido en el discurso de la prudencia desplegado por los defensores de la ortodoxia conservadora, fue esquilmado durante el gobierno del coronel. Contraviniendo la ley, el equipo económico de Gutiérrez, afín con esa posición económica, dispuso de esos recursos a través de simples decretos ejecutivos: por ejemplo el Nº 1.292, del 18 de mayo, y el Nº 1.980, del 31 de agosto de 2004.

A lo anterior habría que incorporar el efecto de una serie de restricciones fiscales. Con respecto a los gastos, en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que dio lugar al Feirep, expedida un año antes de que el coronel iniciara su gestión, se estableció, entre otras cosas, que el gasto fiscal real no puede incrementarse por encima del 3,5% anual más el deflactor del PIB. Cualquier excedente fiscal que se registrara debía fluir automáticamente al Feirep. De esta manera, sin importar incluso los ingresos extras que pudiera obtener el Estado –por ejemplo una donación externa–, la ley establecía la imposibilidad de aumentar el gasto público más allá del límite establecido. Nótese que esto le ponía un freno automático a la inversión social. De haberse seguido indefinidamente con este «esquema económico exitoso» (José Sanmaniego *dixit*), apenas en 47 años –casi medio siglo–, el Ecuador –según un estudio de la Unicef– habría alcanzado el nivel de inversión social per cápita promedio de América Latina: 540 dólares, frente a los 130 dólares de la actualidad. La prudencia ortodoxa apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la sociedad dispusiera de reservas en los años críticos, sino para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha beneficiado nunca el país, por más que se reitere lo

5. La historia se repite. Hace 160 años, el general Juan José Flores, primer presidente de Ecuador, luego de ser derrocado el 6 de marzo de 1845 por la «revolución marcista», se refugió en Europa con las mismas intenciones que ahora tuvo el coronel. Flores buscó el apoyo de los tenedores de bonos para financiar una expedición con la que él, embarcado en un truculento proyecto de reconquista europea, pretendía retornar al poder. A cambio se ofrecía a los acreedores un arreglo satisfactorio a sus reclamos y la entrega del país a una ola masiva de colonos. Cuando ya tenía un ejército en armas en España, sobre todo compuesto por mercenarios de ese país, la invasión no prosperó por falta de apoyo británico. Si bien parece que la historia se repite, no siempre todo es igual. Sabemos que cualquiera haya sido la causa que defendiera el general Flores, en todos sus intentos fue valiente. Algo que no se puede decir del coronel.

contrario. «Nada es un signo más real de necedad que hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez, y esperar que los resultados sean diferentes», reconocía Alberto Einstein.

Autoritarismo y manejo económico excluyente van de la mano

En consonancia con la política autoritaria derivada de un manejo económico concentrador y excluyente, se multiplicaron las violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos. El coronel disolvió dos veces la Corte Suprema de Justicia; ratificó su servilismo con Washington, al involucrar cada vez más al Ecuador en el Plan Colombia y al alentar ingenua y entusiastamente el Tratado de Libre Comercio; y, al mismo tiempo, fue sumiso con todos los grupos oligárquicos, a los que sirvió en forma secuencial, pero obsecuente, tratando de confundir a la opinión pública con sus prácticas clientelares y su discurso antioligárquico. Ante tanto atropello, amplias capas de la población, sobre todo en Quito, espontáneamente se movilizaron por la dignidad, exigiendo cambios profundos y no un simple recambio de presidente.

La tarea para el gobierno del doctor Alfredo Palacio, surgido de la rebelión de abril, no es fácil. Se encuentra «a caballo», entre las expectativas «forajidas» que esperan transformaciones y su negativa a abrir un debate político amplio y participativo para preparar la ansiada Asamblea Constituyente y la consulta popular en donde deberían resolverse todos los temas de fondo que tanto interesan a la sociedad, incluyendo la aceptación o no del TLC; entre el cambio de rumbo en materia económica que empieza a cristalizarse desde el ministerio del ramo y los desesperados esfuerzos de los sectores ortodoxos para seguir en el mismo sendero neoliberal; entre el chantaje financiero de los organismos multilaterales de crédito y el anunciado apoyo económico de Caracas; entre las presiones de Washington para conseguir que Ecuador se mantenga confiable dentro de la lógica belicista del Plan Colombia y la búsqueda de posiciones más soberanas por parte de la Cancillería. En síntesis, este gobierno despierta esperanzas en varios ámbitos, aunque en otros parece que no ha entendido el múltiple reclamo «forajido», que podría sintetizarse en la construcción de una democracia en serio.